

# GACETA OFICIAL

## DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

AÑO CIII — MES IX

Caracas: miércoles 16 de junio de 1976

Número 31.004

### SUMARIO

#### Congreso de la República

Ley Orgánica del Ambiente.

#### Presidencia de la República

Decreto N° 1.598, mediante el cual se hacen las modificaciones de competencia que en él se especifican, en los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Decreto N° 1.599, mediante el cual se hacen las modificaciones de competencia que en él se mencionan, en los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Territorio Federal Delta Amacuro.

Decreto N° 1.600, mediante el cual se hacen las modificaciones de competencia que en él se mencionan, en los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

Decreto N° 1.601, mediante el cual se hacen las modificaciones de competencia que en él se mencionan, en los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.

Decreto N° 1.602, mediante el cual se divide la Circunscripción Judicial del Estado Sucre en dos Circuitos, por requerirlo así las necesidades de la Administración de Justicia.

Decreto N° 1.622, mediante el cual se declara zona especialmente afectada con motivo de la Ampliación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, dos lotes de terreno y las bienhechurías en ellos existentes, ubicados en jurisdicción de la Parroquia Catia La Mar del Departamento Vargas del Distrito Federal.

Decreto N° 1.623, por el cual las empresas legalmente constituidas para la explotación de la industria del transporte, podrán ejercer el sistema de transporte combinado de mercancías de importación, exportación y tránsito, por las vías marítima, aérea y terrestre.

Decreto N° 1.636, por el cual se declara zona especialmente afectada para la construcción del Ferrocarril Troncal San Juan de los Morros - Valle de la Pascua - Anaco - El Tigre - Ciudad Bolívar - Ciudad Guayana y Ramal al Tuy Medio, la franja de terreno de 5 kms. a cada lado del eje que se determina conforme a los planos aprobados con anterioridad por el Instituto Autónomo Administración de Ferrocarriles del Estado y las bienhechurías en ella existentes ubicada en jurisdicción de los Distritos Roscio, Monagas, Infante, Rivas y Zaraza (Estado Guárico); San Sebastián, San Casimiro y Urdaneta (Estado Aragua); Aragua, Anaco, Freites, Simón Rodríguez, Independencia (Estado Anzoátegui); Heres (Estado Bolívar); y, Urdaneta y Lander (Estado Miranda).

Decreto N° 1.640, por el cual se modifica la jurisdicción del Juzgado Militar Primero de Primera Instancia Permanente de Barquisimeto dada en el Decreto de su creación; y en consecuencia, la nueva jurisdicción comprenderá los siguientes Estados: Lara, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy y Trujillo.

#### Ministerio de Relaciones Interiores

Resolución por la cual se concede autorización solicitada a la empresa mercantil "Seguridad Integral" JUCEPRA, C. A.

Resolución por la cual se edita una nueva edición de la Ley sobre la Condecoración de la "Orden Francisco de Miranda".

#### Ministerio de Relaciones Exteriores

Resolución por la cual se nombra al ciudadano Ney Pulgar González, Director de Relaciones Consulares de este Despacho, como Encargado de la Dirección de Administración.

Nota diplomática.

#### Ministerio de Hacienda

Resolución por la cual se concede autorización solicitada a la Sociedad Financiera Inversiones Fénix, C. A.

Resolución por la cual se encarga de la Aduana Centro-Occidental, al ciudadano Leonel Rangel, Inspector Fiscal General de Hacienda

Resolución por la cual se encarga de la Administración Regional de Hacienda de la Región Central, al ciudadano Juan Olivar Betancourt, Inspector Fiscal General de Hacienda III.

#### Ministerio de Obras Públicas

Resolución por la cual se designa Presidente del Instituto Nacional de Parques (INAP), al Ing° Marcelo González Molina.

#### Ministerio de Minas e Hidrocarburos

Denuncio minero.

#### Consejo Supremo Electoral

Acta Oficial contenitivo de la solicitud de Inscripción de la Agrupación Política "Democracia Popular" (D.P.) en los Estados Guárico y Portuguesa (en proceso de legalización). — (Véase N° 1.883 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).

#### Avisos

### CONGRESO DE LA REPUBLICA

#### EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

Decreta:

la siguiente

#### LEY ORGANICA DEL AMBIENTE

##### CAPITULO I

##### Disposiciones generales

Artículo 1°—La presente Ley tiene por objeto establecer dentro de la política del desarrollo integral de la Nación, los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de la vida.

Artículo 2°—Se declaran de utilidad pública la conservación, la defensa y el mejoramiento del ambiente.

Artículo 3°—A los efectos de esta Ley, la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprenderá:

- 1° La ordenación territorial, y la planificación de los procesos de urbanización, industrialización, poblamiento y desconcentración económica, en función de los valores del ambiente;
- 2° El aprovechamiento racional de los suelos, aguas, flora, fauna, fuentes energéticas y demás recursos naturales, continentales y marinos, en función de los valores del ambiente;
- 3° La creación, protección, conservación y mejoramiento de parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, zonas protectoras, reservas de regiones vírgenes, cuencas hidrográficas, reservas nacionales hidráulicas; refugios, santuarios y reservas de faunas silvestres, parques de recreación a campo abierto o de uso intensivo, áreas verdes en centros urbanos o de cualesquiera otros espacios sujetos a un régimen especial en beneficio del equilibrio ecológico y del bienestar colectivo;
- 4° La prohibición o corrección de actividades degradantes del ambiente;
- 5° El control, reducción o eliminación de factores, procesos o componentes del ambiente que sean o puedan ocasionar perjuicios a la vida del hombre y de los demás seres;
- 6° La orientación de los procesos educativos y culturales a fin de fomentar conciencia ambiental;
- 7° La promoción y divulgación de estudios e investigaciones concernientes al ambiente;
- 8° El fomento de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación ciudadana en los problemas relacionados con el ambiente;
- 9° La educación y coordinación de las actividades de la Administración Pública y de los particulares, en cuanto tengan relación con el ambiente;
10. El estudio de la política internacional para la defensa del ambiente, y en especial de la región geográfica donde está ubicada Venezuela;
11. Cualesquiera otras actividades que se consideren necesarias al logro del objeto de esta Ley.

Artículo 4°—La suprema dirección de la política nacional sobre el ambiente corresponde al Presidente de la República en Consejo de Ministros. A tal efecto, dictará las normas sobre coordinación de las competencias de los organismos de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, en función de los objetivos de la presente Ley.

### CAPITULO II

#### De la planificación ambiental

Artículo 5°—La planificación del desarrollo nacional, regional o local deberá realizarse integralmente a los fines de dar cumplimiento al objeto de la presente Ley.

Artículo 6°—Los organismos de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios; las instituciones, corporaciones o entidades de carácter público y aquellas de carácter privado en las cuales el Estado, directa o indirectamente participe con el 50% o más de su capital social, deberán programar y ejecutar sus actividades de acuerdo con las previsiones del Plan Nacional de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente y de conformidad con las reglas que se dicten en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley.

Artículo 7°—El Plan Nacional de conservación, defensa y mejoramiento ambiental, formará parte del Plan de la Nación y deberá contener:

- 1° La ordenación del territorio nacional según los mejores usos de los espacios de acuerdo a sus capacidades, condiciones específicas y limitaciones ecológicas;
- 2° El señalamiento de los espacios sujetos a un régimen especial de protección, conservación o mejoramiento;
- 3° El establecimiento de criterios prospectivos y principios que orienten los procesos de urbanización, industrialización, desconcentración económica y poblamiento en función de los objetivos de la presente Ley;
- 4° Las normas para el aprovechamiento de los recursos naturales basadas en el principio del uso racional de los recursos, en función de los objetivos de la presente Ley;
- 5° Los programas de investigación en materia ecológica;
- 6° Los objetivos y medidas de instrumentación que se consideren favorables a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.

### CAPITULO III

#### Del Consejo Nacional del Ambiente

Artículo 8°—Se crea el Consejo Nacional del Ambiente adscrito a la Presidencia de la República.

Artículo 9°—El Consejo estará integrado por un Presidente y por sendos representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de la Defensa, de Fomento, de Obras Públicas, de Educación, de Sanidad y Asistencia Social, de Agricultura y Cría, de Comunicaciones y de Minas e Hidrocarburos; de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, de la Comisión del Plan Nacional para el aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, del Consejo Nacional de Universidades, de los sectores laboral y empresarial y de las sociedades naturalistas de Venezuela. El Presidente y los representantes mencionados deberán ser personas de reconocida competencia en la materia.

El Presidente de la República podrá incorporar al Consejo, representantes de otros Despachos Ministeriales, Institutos o Asociaciones de carácter público o privado.

Artículo 10.—El Presidente del Consejo Nacional del Ambiente será de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República.

Artículo 11.—El Consejo Nacional del Ambiente forma parte del sistema nacional de coordinación y planificación y tendrá las siguientes atribuciones:

- 1° Actuar como órgano de consulta de la Presidencia de la República;
- 2° Proponer las normas de coordinación de las actuaciones que deben cumplir los diferentes organismos y enti-

dades a que se refiere el artículo 6° y que tienen competencia en relación con la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente;

- 3° Examinar el marco jurídico-institucional del Estado relativo a las materias objeto de la presente Ley y proponer las reformas e innovaciones que fueren menester;
- 4° Elaborar, en consulta con la Oficina Central de Coordinación y Planificación, el Plan Nacional de conservación, defensa y mejoramiento ambiental;
- 5° Colaborar en la formulación de los programas anuales de los organismos de la Administración Pública relativos al ambiente;
- 6° Formular al órgano encargado de preparar el Proyecto de Ley de Presupuesto las recomendaciones de asignaciones presupuestarias para atender los requerimientos de los programas de los organismos de la Administración Pública relativos al ambiente;
- 7° Promover la formación y capacitación del personal especializado;
- 8° Presentar un informe anual sobre su gestión; así como de los resultados obtenidos en la ejecución de esta Ley;
- 9° Dictar su reglamento interno;
10. Las demás que le otorgan las leyes y los reglamentos.

Artículo 12.—Los funcionarios de la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, están en la obligación de colaborar con el Consejo Nacional del Ambiente.

Artículo 13.—El Consejo Nacional del Ambiente podrá propiciar la creación de Fundaciones para promover y divulgar estudios e investigaciones concernientes al ambiente o para desarrollar tecnologías favorables a su conservación, defensa y mejoramiento. Las Fundaciones, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, podrán recibir aportaciones del sector público o de los particulares. Estos aportes serán deducibles en los términos y condiciones que disponga la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Las Fundaciones destinarán los recursos que obtengan, al incremento de programas que realicen los organismos de investigación existentes.

### CAPITULO IV

#### De la administración ambiental

Artículo 14.—Se crea la Oficina Nacional del Ambiente, adscrita a la Presidencia de la República.

Artículo 15.—La Oficina Nacional del Ambiente tendrá las siguientes atribuciones:

- 1° Vigilar la ejecución de las normas que dicte el Presidente de la República sobre la coordinación de los organismos de la Administración Pública en el ejercicio de sus atribuciones con incidencia ambiental;
- 2° Evaluar y vigilar la ejecución del Plan a que se contrae el ordinal 4° del artículo 11 de esta Ley;
- 3° Coordinar el servicio de guardería ambiental;
- 4° Desempeñar la secretaría del Consejo Nacional del Ambiente;
- 5° Promover la creación de Juntas para la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, con la organización y atribuciones que señale el Reglamento respectivo;
- 6° Las demás que le señalen la Ley y los reglamentos.

Parágrafo único.—El Presidente de la República en Consejo de Ministros podrá asignar, parcial o totalmente, a un Despacho Ministerial alguna de las funciones antes enumeradas.

Artículo 16.—La guardería ambiental comprende el examen la vigilancia y la fiscalización de las actividades que directa o indirectamente puedan incidir sobre el ambiente y velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento ambiental.

Artículo 17.—Ejercerán las funciones de guardería ambiental la Guardia Nacional, las Juntas para la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente y los demás organismos y funcionarios a quienes las leyes respectivas les confieren atribuciones en las materias objeto de esta Ley.

Artículo 18.—El Ejecutivo Nacional dictará las normas sobre composición, organización y funcionamiento de la Oficina Nacional del Ambiente.

### CAPITULO V

#### De la prohibición o corrección de actividades susceptibles de degradar el ambiente

Artículo 19.—Las actividades susceptibles de degradar el ambiente quedan sometidas al control del Ejecutivo Nacional por órgano de las autoridades competentes.

Artículo 20.—Se consideran actividades susceptibles de degradar el ambiente:

- 1° Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren el aire, el agua, los fondos marinos, el suelo o el subsuelo o incidan desfavorablemente sobre la fauna o la flora;
- 2° Las alteraciones nocivas de la topografía;
- 3° Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;
- 4° La sedimentación en los cursos y depósitos de aguas;
- 5° Los cambios nocivos del lecho de las aguas;
- 6° La introducción y utilización de productos o sustancias no bio-degradables;
- 7° Las que producen ruidos molestos o nocivos;
- 8° Las que deterioran el paisaje;
- 9° Las que modifiquen el clima;
10. Las que produzcan radiaciones ionizantes;
11. Las que propenden a la acumulación de residuos, basuras, desechos y desperdicios;
12. Las que propenden a la eutricación de lagos y lagunas;
13. Cualesquiera otras actividades capaces de alterar los ecosistemas naturales e incidir negativamente sobre la salud y bienestar del hombre.

Artículo 21.—Las actividades susceptibles de degradar el ambiente en forma no irreparable y que se consideren necesarias por cuanto reporten beneficios económicos o sociales evidentes, sólo podrán ser autorizados si se establecen garantías, procedimientos y normas para su corrección. En el acto de autorización se establecerán las condiciones, limitaciones y restricciones que sean pertinentes.

Artículo 22.—La autorización prevista en el artículo anterior, deberá otorgarse en atención a los objetivos, criterios y normas establecidas por el Plan Nacional de conservación, defensa y mejoramiento ambiental.

Artículo 23.—Quienes realicen actividades sometidas al control de la presente Ley deberán contar con los equipos y el personal técnico apropiados para el control de la contaminación. La clasificación y cantidad del personal dependerá de la magnitud del establecimiento y del riesgo que ocasione. Corresponderá al Reglamento determinar los sistemas y procedimientos de control de la contaminación.

### CAPITULO VI

#### De las sanciones

Artículo 24.—Los infractores de las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento ambiental serán sancionados con multas, medidas de seguridad o con penas privativas de la libertad, en los términos que establezcan esta Ley o las demás leyes aplicables.

Artículo 25.—La aplicación de las penas a que se refiere el artículo anterior no obsta para que el organismo correspondiente adopte las medidas necesarias para evitar las consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado. Tales medidas podrán consistir:

- 1° Ocupación temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes, la cual no podrá exceder de seis meses;
- 2° Clausura temporal o definitiva de las fábricas o establecimiento que con su actividad alteren el ambiente, degradándolo o contaminándolo, ya sea directa o indirectamente;
- 3° Prohibición temporal o definitiva de la actividad origen de la contaminación;

4° La modificación o demolición de construcciones violatorias de disposiciones sobre protección, conservación o defensa del ambiente;

5° Cualesquiera otras medidas tendientes a corregir y reparar los daños causados y evitar la continuación de los actos perjudiciales al ambiente.

Artículo 26.—El organismo competente para decidir acerca de las sanciones previstas en el artículo anterior, podrá adoptar en el curso del proceso correspondiente, las medidas preventivas que fueren necesarias para evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga. Tales medidas podrán consistir:

- 1° Ocupación temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes, hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante;
- 2° Clausura temporal de las fábricas o establecimientos que con su actividad alteren el ambiente, degradándolo o contaminándolo, ya sea directa o indirectamente;
- 3° Prohibición temporal de la actividad origen de la contaminación;
- 4° La modificación de construcciones violatorias de disposiciones sobre conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; y
- 5° Cualesquiera otras medidas tendientes a corregir y reparar los daños causados y evitar la continuación de los actos perjudiciales al ambiente.

Artículo 27.—Sin perjuicio de la aplicación de las penas y sanciones previstas en los artículos 24 y 25, de las acciones que se ejerzan en virtud del artículo 32 de esta Ley o de otras acciones que se derivan del derecho común, quienes realicen actividades que produzcan degradación de los bienes del dominio público, serán responsables ante la República de los daños causados, salvo que demuestren que han sido ocasionados por el hecho de un tercero, por caso fortuito o fuerza mayor. En las mismas condiciones estarán obligados al pago de los daños correspondientes, quienes resulten civilmente responsables en los términos de los artículos 1.190 al 1.194 del Código Civil.

La determinación de la cuantía de los daños se hará mediante dictamen de tres expertos nombrados por el Tribunal de la causa. El dictamen de los expertos tomará en cuenta el deterioro que se haya causado al ambiente, la situación económica del obligado a reparar el daño y los demás elementos que según el caso deban considerarse como indispensables.

Las partes podrán impugnar el dictamen si no cumplieren los requisitos que sobre la materia establece el Código Civil en su artículo 1.425. El Juez, si se demostrare la justeza de la impugnación, ordenará, por una sola vez, la realización de una nueva experticia.

Parágrafo único.—Si la indemnización que deba pagarse se fundamenta en daños causados a bienes propiedad de los Estados o de los Municipios, las sumas correspondientes ingresarán al Tesoro de los Estados o de los Concejos Municipales de que se trate, deducidos los costos y gastos judiciales.

Artículo 28.—La acción penal que surja en virtud de los hechos sancionados en esta Ley o de las leyes especiales correspondientes, es pública y procede por denuncia o de oficio.

Artículo 29.—Los procesos sobre la materia que trata la presente Ley, las leyes especiales y los reglamentos que en ejecución de ellas se dictaren, serán gratuitas, en papel común y sin estampillas.

### CAPITULO VII

#### De la Procuraduría del Ambiente

Artículo 30.—Se crea la Procuraduría del Ambiente, con sede en Caracas y jurisdicción en todo el Territorio Nacional, con la organización, funcionamiento y atribuciones que establezca la Ley respectiva.

Artículo 31.—Corresponde a la Procuraduría del Ambiente ejercer la representación del interés público en los procesos civiles y administrativos a seguirse contra los infractores de esta Ley, las leyes especiales y los reglamentos.

Los Procuradores de los Estados y los Síndicos Procuradores Municipales, están en la obligación de denunciar por ante la Procuraduría del Ambiente, los hechos que puedan constituir violaciones a la presente Ley y de los cuales tengan conocimiento. En caso de incumplimiento, serán responsables en los términos que establezcan las leyes respectivas.

Artículo 32.—Todo ciudadano puede acudir por ante la Procuraduría del Ambiente o sus auxiliares para demandar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, a fin de que las actividades o hechos denunciados sean objeto de investigación.

Artículo 33.—Corresponde a los Fiscales del Ministerio Público y a los Síndicos Municipales el ejercicio de la acción penal en los juicios que se prosigan por violación de las disposiciones sobre conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Los Procuradores del Ambiente serán auxiliares del Ministerio Público.

#### CAPITULO VIII

##### Disposiciones transitorias y finales

Artículo 34.—Mientras no sean creados y dotados los órganos previstos en esta Ley, las funciones administrativas sobre conservación, defensa y mejoramiento ambiental, las tendrán quienes en la actualidad las ejercen de conformidad con las respectivas leyes vigentes.

Artículo 35.—Las prohibiciones y restricciones que se impongan de conformidad con la presente Ley constituyen limitaciones de la propiedad y no darán derecho al pago de indemnización.

Artículo 36.—En ejecución de esta Ley, deberán dictarse las adecuadas normas penales en garantía de los bienes jurídicos tutelados por la misma, y las penas correspondientes serán hasta de un millón de bolívares, si se tratara de multas, y hasta de diez años de prisión si consistieren en penas privativas de libertad, debiéndose hacer la fijación de acuerdo a la mayor o menor gravedad del hecho punible, a las condiciones del autor del mismo y a las circunstancias de su comisión.

Hasta tanto se promulgan las leyes que se dicten en ejecución de esta Ley, continuarán aplicándose las sanciones establecidas en los siguientes artículos: 345, 346, 348, 349, 357, 364 y 365 del Código Penal; 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Sanidad Nacional; 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 122 y 123 de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas; 206 del Reglamento de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas; 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 113 de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre; 27 de la Ley de Pesca; 85 de la Ley de Hidrocarburos en cuanto se refiere al incumplimiento de las obligaciones previstas en el ordinal 5º del artículo 59 de esa misma Ley; 12 de la Ley de Vigilancia para impedir la Contaminación de las Aguas por el Petróleo, por los hechos punibles tipificados en las citadas disposiciones legales.

Artículo 37.—Se derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los siete días del mes de junio de mil novecientos setenta y seis. Año 167º de la Independencia y 118º de la Federación.

El Presidente,

(L. S.)

GONZALO BARRIOS.

El Vicepresidente,

Oswaldo Alvarez Paz.

Los Secretarios:

Andrés Eloy Blanco Iturbe.

Leonor Mirabal M.

Palacio de Miraflores, Caracas, quince de junio de mil novecientos setenta y seis. Año 167º de la Independencia y 118º de la Federación.

Cumplase.

(L. S.)

CARLOS ANDRÉS PEREZ.

Refrendado:

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(L. S.)

OCTAVIO LEPAGE.

Refrendado.

El Ministro de la Defensa,

(L. S.)

FRANCISCO ELOY ALVAREZ TORRES.

Refrendado.

El Ministro de Fomento Encargado,

ROBERTO POCATERRA.

Refrendado.

El Ministro de Obras Públicas,

(L. S.)

ARNOLDO JOSE GABALDON.

Refrendado.

El Ministro de Educación,

(L. S.)

LUIS MANUEL PEÑALVER.

Refrendado.

El Ministro de Sanidad y Asistencia Social,

(L. S.)

ANTONIO PARRA LEON.

Refrendado.

El Ministro de Agricultura y Cría,

(L. S.)

CARMELO CONTRERAS BARBOZA.

Refrendado.

El Ministro de Comunicaciones,

(L. S.)

LEOPOLDO SUCRE FIGARELLA.

Refrendado.

El Ministro de Minas e Hidrocarburos Encargado,

(L. S.)

HERNAN ANZOLA JIMENEZ.

## PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DECRETO NUMERO 1.598 — 26 DE MAYO DE 1976

CARLOS ANDRÉS PEREZ,  
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

En uso de la atribución que le confiere el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el artículo 19 de la Ley de Tránsito Terrestre, en Consejo de Ministros,

Decretó:

Artículo 1º.—En los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, se hacen las modificaciones de competencia siguientes:

a) Competencia Territorial. — Se le suprime la competencia territorial a los actuales Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo, con sede en Mérida, sobre los Distritos: Alberto Adriani, Rivas Dávila, Sucre, Tovar y Arzobispo Chacón. Por consiguiente, en adelante la jurisdicción de estos Tribunales será en los Distritos Libertador, Andrés Bello, Campo Elías, Justo Briceño, Miranda y Rangel.

Se le amplía la competencia territorial al actual Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo, con sede en Tovar, sobre el Distrito Arzobispo Chacón. Por consiguiente, en adelante la jurisdicción de este Tribunal será en los Distritos: Alberto Adriani, Rivas Dávila, Sucre, Tovar y Arzobispo Chacón.

Los asuntos en curso en dichos Tribunales, seguirán conociéndose por sus respectivos Titulares, no obstante la nueva competencia territorial que se les señala.

El Juzgado del Municipio Mucuchachí ejercerá también la competencia territorial en el Municipio Mucutuy, ambos del Distrito Arzobispo Chacón.

El Juzgado del Municipio Independencia ejercerá también la competencia territorial en el Municipio Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia), ambos del Distrito Justo Briceño.